Situación de derechos de las mujeres, niños, niñas y jóvenes e interseccionalidad en Colombia,

Buenaventura-Valle del Cauca, Cauca, Bajo Atrato Chocoano 2019/2022

SITUACIÓN DE DERECHOS

de las mujeres, niños, niñas y jóvenes e interseccionalidad en Colombia, Buenaventura-Valle del Cauca, Cauca, Bajo Atrato Chocoano 2019/2022

Informe elaborado en el marco de dos proyectos apoyados por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)

El proyecto «Mujeres, niños y jóvenes libres de violencia en Buenaventura» es implementado por la organización Taller Abierto en Colombia, en colaboración con la organización francesa Agir Ensemble pour les Droits Humains. Su objetivo general es responder a los problemas de violaciones de derechos humanos y violencia cotidiana que sufren los habitantes de Buenaventura y apoyar la movilización de niños, niñas, jóvenes y mujeres por sus derechos y el desarrollo de alternativas comunitarias y culturales en el distrito de Buenaventura. También busca fortalecer los entornos de protección dentro de las familias, las comunidades y las instituciones educativas, promover el diálogo con las autoridades y sensibilizar sobre la situación de Buenaventura a nivel local, nacional e internacional. El proyecto está cofinanciado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y cuenta con el apoyo de las organizaciones Terre des Hommes Suiza, Terre des Hommes Alemania, la Red Francia Colombia Solidaridades (RFCS) y la Red Eulat.

El proyecto «Vamos por la paz: apoyo a la participación ciudadana en el contexto post-Acuerdo de Paz en Colombia», es implementado por una alianza de 10 organizaciones francesas de la sociedad civil, miembros de la Red Francia Colombia Solidaridades (RFCS), y 13 organizaciones colombianas. Creado en 2017 de la voluntad de estas organizaciones de unir sus esfuerzos por la construcción de la paz en Colombia, el programa tiene como objetivo principal apoyar a las comunidades locales, afrodescendientes, campesinas e indígenas de tres regiones de Colombia profundamente marcadas por el conflicto colombiano e históricamente abandonadas por el Estado, a saber: la costa pacífica del Cauca, el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, y la región del Bajo Atrato en Choco. Este apoyo se

manifiesta por la capacitación de organizaciones comunitarias de base y el refuerzo del liderazgo de mujeres y jóvenes, el apoyo a espacios de consulta con múltiples partes interesadas y la apertura de diálogos entre la sociedad civil y las autoridades locales y nacionales para la consolidación de la paz. Este proyecto pretende crear una asociación sostenible entre Francia y Colombia para consolidar la paz en este país.

Tabla de siglas

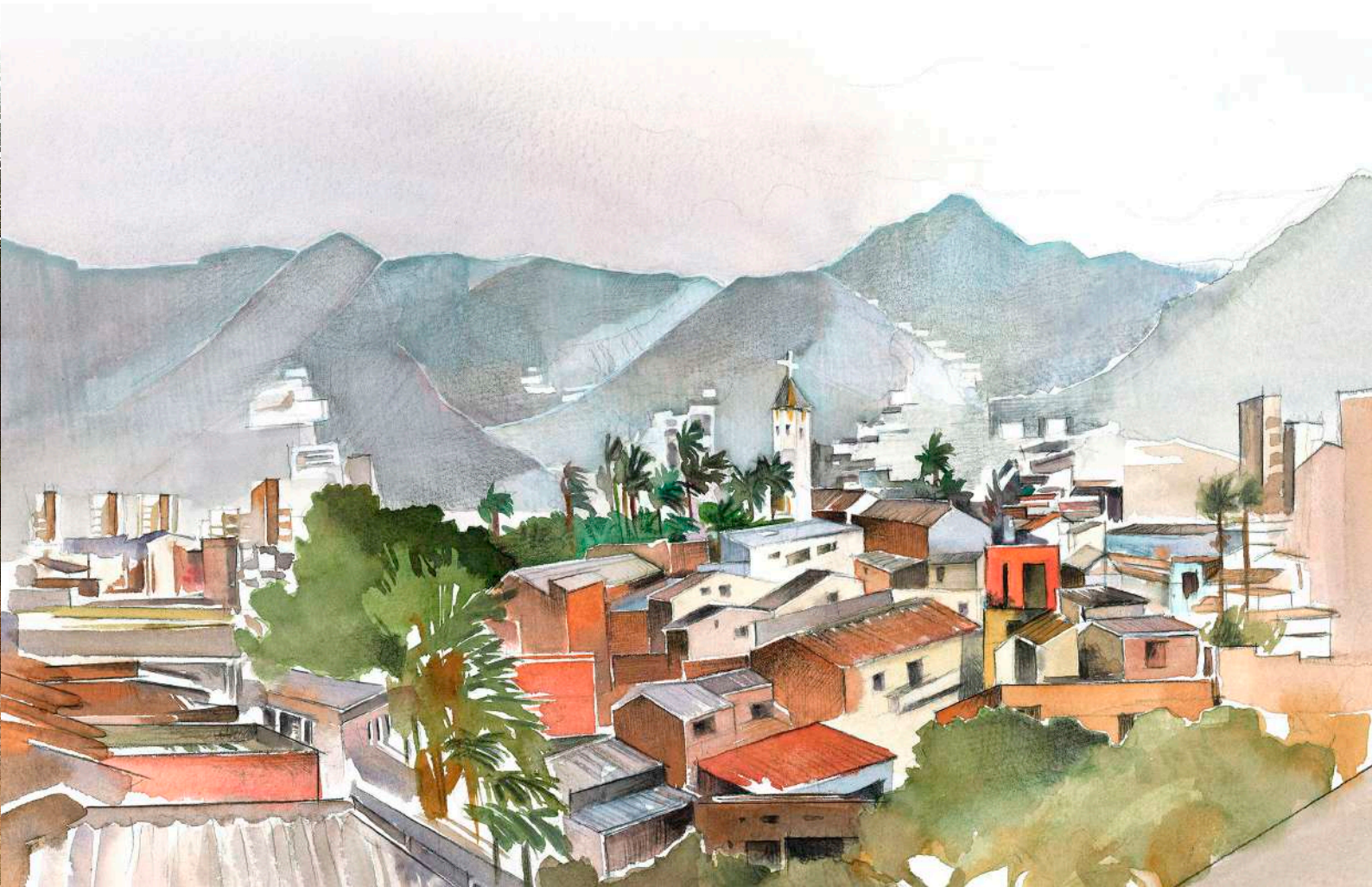
AGC	Autodefensas Gaitanistas de Colombia
ARN	Agencia para la Reincorporación y la Normalización
CONPES 3931	Consejo Nacional de Política Económica y Social
CNR	Consejo Nacional de Reincorporación
CPEM	Consejería Presidencial Equidad Mujer
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ELN	Ejército de Liberación Nacional
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
ICH	Índice de Capital Humano
LGBTQ	Lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer
OPROB	Observatorio del Bienestar de la Niñez
PDET	Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
PNIS	Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos
RUV	Registro Único de Víctimas
SISEP	Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política
SIVIGILA	Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública
UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

"Según el infirme de Indepaz, los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Chocó están entre los más afectados por asesinatos de lideres(as) sociales y defensores de derechos humanos ..."

Entre 2019-2022 se vivió en Colombia un panorama de implementación de los Acuerdos de Paz, un contexto particular preelectoral, de paro nacional y de pandemia mundial por COVID-19, reconociendo este contexto, el presente informe se sitúa desde la región pacífica, específicamente en Buenaventura (Valle del Cauca), Cauca (norte y occidente) y Bajo Atrato Chocoano, para evidenciar la difícil situación que afrontan mujeres, niños, niñas y adolescentes, como primeras víctimas de las repercusiones socio-económicas. Esta región se caracteriza por tener mayor presencia de grupos étnicos y territorios colectivos de todo el país, cuenta con importantes procesos organizativos de la sociedad civil, como los consejos comunitarios de las comunidades afrocolombianas y los resguardos indígenas que defienden el territorio; asimismo se destaca por sus riquezas naturales, hídricas y minerales, lo cual le ha acarreado afectaciones severas por parte de grupos armados que se disputan el territorio y lo permean con economías ilegales y/o extractivistas, relacionadas con los cultivos de uso ilícito, el tráfico de cocaína interno y hacia el exterior del país, de la explotación legal o ilegal de minerales y los extensos terrenos destinados al monocultivo,

además contaminan ríos y deforestan bosques, modificando culturas ancestrales de las comunidades y poniendo en peligro su existencia.

Los habitantes de esta región padecen la debilidad institucional del Estado, reflejándose en que muchos se encuentran bajo la línea de pobreza, tienen altos niveles de desempleo, su calidad de educación en todos los niveles es menor que en las ciudades capitales y sus vías de comunicación terrestre son precarias, evidenciando una relativa condición de aislamiento y una violación de sus derechos, asociados también a determinantes sociales estructurales, como sexo, género y etnicidad. A través de los proyectos "Mujeres, niños y jóvenes libres de violencia en Buenaventura" y "Vamos por la paz", se crearon sinergias para visibilizar esta problemática y elaborar recomendaciones a nivel nacional e internacional, conformando un comité de profesionales con larga trayectoria y experticia en género, derechos de las mujeres e interseccionalidad, quienes llevaron a cabo 16 entrevistas a líderes(as) y profesionales que realizan investigación o intervención psicosocial en los territorios mencionados, además los análisis que acompañaron este proceso estuvieron permeados por los enfoques de género, antirracista, étnico, diferencial e interseccional, como una forma de develar la multiplicidad y multidimensionalidad de las violencias basadas en género.



"Es preocupante que luego de seis años de firmarse el Acuerdo, la transversalización del enfoque de género esté siendo tan limitada ..."

Contexto político y socioeconómico

Luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, y pasado un tiempo de apaciguamiento del conflicto, en la región aludida se reconfigura la presencia de actores armados (ELN, disidentes de las FARC, Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC y bandas delincuenciales) y se incrementan los hechos violentos contra la población civil. Según el infirme de Indepaz, los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Chocó están entre los más afectados por asesinatos de lideres(as) sociales y defensores de derechos humanos, con 31, 16 y 13 muertes en el año 2021[1].

Buenaventura: tiene el mayor puerto del país, moviliza más del 60% de importaciones y exportaciones, sin embargo, el enriquecimiento del puerto ha generado desigualdades, aumento de la violencia y empobrecimiento de sus habitantes (que son alrededor de 311.824 personas[2], el 80% son afrodescendientes y el 6% son indígenas), además enfrenta una crisis humanitaria hace más de 20 años, el 82% de su población se encuentra en pobreza extrema[3], y su posición estratégica ha sido clave para la economía ilegal, el narcotráfico, el asentamiento de multinacionales y grupos armados que instauraron un orden social criminal sustentado en la extorción a la ciudadanía (las denuncias por extorsión han aumentado un 156%[4]). Se considera la ciudad más peligrosa del país y la treceava más peligrosa del mundo con una tasa de 59,33 homicidios por cada 100,000 habitantes[5], entre 2017-2021 registró 58.395 víctimas por algún tipo de violencia, 50.849 casos de desplazamiento, 2.636 amenazas, 3.374 casos de confinamiento forzado, y 576 homicidios[6].

Cauca: a nivel nacional es el departamento con mayor población indígena, tiene el mejor potencial para la generación de energía hidráulica, es el cuarto

1 Indepaz. (2021). Cifras de la violencia en las regiones 2021, https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2022/01/INFORME-FINAL-2021.pdf

2 Proyecciones realizadas por el DANE a partir del CENSO Nacional de Población y Vivienda del 2018.

3 Buenaventura Cómo Vamos (2020). Pobreza Dimensional en Buenaventura, un tema de acciones y resultados,2https://www.buenaventuracomovamos.org/pobreza-multidimensional-en-buenaventura-un-tema-de-acciones-y-resultados/

4 18Boletín No. 1 – Juventud y violencia: el posconflicto en Buenaventura Pares Pacífico / CODHES

5 informe elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México

6 Oficina Pares Pacífico. (2022). Boletín N° 1. Juventud y violencia: el posconflicto en Buenaventura. https://www.pares.com.co/post/bolet%C3%ADn-no-1-juventud-y-violencia-el-posconflicto-en-buenaventura

departamento con mayor área sembrada de coca[7], predominando además la extracción de oro, lo cual ha generado múltiples afectaciones por el conflicto armado, presentando el mayor registro de asesinatos dirigidos principalmente contra lideres(as), defensores de derechos humanos e indígenas, dejando 117 asesinatos selectivos en el 2020[8], de igual manera, los grupos armados ejercen presión contra los procesos organizativos y sociales generando amenazas, desapariciones forzadas, hostigamientos y ataques terroristas.

Bajo Atrato chocoano: su ubicación es privilegiada, colinda con el océano pacífico y el caribe, con la selva del Darién y el nudo del Paramillo, sin embargo, es un lugar de difícil acceso, por lo cual el río se convierte en la única autopista, esta conexión geográfica ha hecho favorable el desarrollo de economías ilegales y la explotación de recursos naturales de manera indiscriminada, su principal fuente de ingresos es la extracción de oro y madera, el proyecto palmero llegó al territorio como una estrategia de guerra durante los momentos más duros del conflicto armado[9].

---

7 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC (2020). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos-Colombia, https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_territorios_afectados_por_cultivos_ilicitos_2020.pdf

8 Fundación Paz y Reconciliación PARES (2021). La tragedia del Cauca, un escenario de reconfiguración armada, https://www.pares.com.co/post/la-tragedia-del-cauca-un-escenario-de-reconfiguraci%C3%B3n-armada

9 De acuerdo con los investigadores Luque Pérez y Espinosa, la llegada de cultivos de palma para la extracción de aceite fue una estrategia utilizada por grupos paramilitares para perpetuar el control, lavar dinero y hacer despojo de tierras.

"... muchas disposiciones del Acuerdo de Paz enfocadas en género y etnicidad no han sido implementadas, los procesos jurídicos de restitución de tierras avanzan lentamente"

Agudización del conflicto en tiempos de paz.

Desde la firma del Acuerdo se evidencia un incremento de masacres, asesinatos a lideres/as (desde la firma del Acuerdo hasta el 2022 se han registrado 541 asesinatos, 65 fueron mujeres y 11 de ellas eran Firmantes de Paz[10]) y desplazamientos forzados, pese a las garantías de seguridad establecidas por el SISEP[11], por esto, European Union Institute señala que un reto principal es vincular el Acuerdo de paz como política de Estado, para garantizar la coherencia entre el Acuerdo con la implementación real de las disposiciones, asegurando la participación de todas las partes interesadas en el proceso[12]. En materia de avance de la implementación, se resalta: el conpes 3931, el trabajo de la Mesa de Género del CNR, la creación del Comité de Género y diversidades, el reconocimiento de las víctimas de violencia de género y sexual ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, recalcando que muchas de las instancias creadas para víctimas, población civil y firmantes de paz surgen como producto de la organización y movilización social, del litigio estratégico y las denuncias a la comunidad internacional. Es preocupante que luego de seis años de firmarse el Acuerdo, la transversalización del enfoque de género esté siendo tan limitada[13], en parte debido falta de presupuesto para programas de reincorporación desde entidades como la ARN[14].

Más que avanzar con la implementación de los Acuerdos, se está presentando una agudización del conflicto, obispos católicos de la Región Pacífico y Suroccidente solicitan iniciar diálogos de paz con el ELN y las AGC, considerando las graves afectaciones que genera el conflicto en la sociedad civil, quienes ade-

---

10 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. (2022). Informe trimestral del secretario general S/2022/513 https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/30.06.22_esp_infografia_informejun2022.pdf

11 KROC Institute for International Peace Studies (2022), Quarterly report: implementation status of the Colombia Final Peace Accord – January/March 2022, https://curate.nd.edu/downloads/r494vh57g3f

12 European Union Institute for Security and peace (Junio de 2021), Implementing the peace agreement in Colombia: challenges for peacebuilding and reconciliation, brief 11, https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief_11_2021.pdf

13 Solo el 12% de estas disposiciones se ha implementado de manera completa, el 17% de manera parcial, y el 29% ha alcanzado un nivel mínimo de implementación. De las 80 disposiciones que incorporan el enfoque étnico, el 13% ha sido implementado integralmente y el 14% de manera incompleta.

14 KROC, University of Notre-Dame (2020), Hacia la implementación del enfoque de género en el acuerdo final de paz de Colombia: oportunidades y retos, https://peaceaccords.nd.edu/wp-content/uploads/2020/12/201207-Corrected-Informe-de-Genero-2020.pdf

más están superando las crisis por la pandemia Covid-19, la cual agudizó afectaciones sobre mujeres, habitantes de la ruralidad, indígenas, afrodescendientes y habitantes en condición de pobreza en el país, enfatizando a las vulneraciones a los derechos humanos que padecen las y los habitantes de la región pacifica en función de su etnia, grupo etario o género. Si bien existen particularidades, muchas violencias son interseccionales, por ejemplo, las mujeres indígenas y afrocolombianas sufren una agudización de violencias no solo en razón de su género, sino también por su etnia y situación socioeconómica, exacerbadas aún más por actores armados, como puede notarse con las 7.500 personas víctimas de desplazamiento forzados en la región Pacífico, de las cuales 80% eran mujeres y niños y 50% pertenecían a comunidades étnicas.

Indígenas: muchas disposiciones del Acuerdo de Paz enfocadas en género y etnicidad no han sido implementadas, los procesos jurídicos de restitución de tierras avanzan lentamente (solo cuatro resguardos indígenas han recibido sentencia a favor de la restitución)[15], así como las acciones jurídicas de salvaguardia de las comunidades[16]. Preocupan los ataques y asesinatos contra defensores de derechos humanos indígenas[17] y afro, principalmente de zonas rurales.

Afrocolombianas: el desarrollo del conflicto armado en la región ha afectado

15 Rutas del conflicto. (2021). Bajo Atrato - Darién - Urabá, Un conflicto que se perpetúa, https://rutasdelconflicto.com/especiales/bajo-atrato-uraba/factores.html

16 La sentencia T-129 de 2011 al no ser plenamente ejecutada, crea una situación continua de vulneración de los derechos fundamentales.

17 Como el asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora del resguardo indígena La Laguna-Siberia SAT Tama kiwe, en el Cauca.

"Hubo un aumento significativo de las violencias y opresiones que sufren las mujeres, debido a la pandemia y a la agudización del conflicto territorial ..."

principalmente el goce de derechos de la población indígena y afrocolombiana; entre enero y mayo de 2018 Medicina Legal reportó 70 asesinatos étnicos contra mujeres, de las cuales el 45% eran afrodescendientes. Persisten brechas frente al acceso y uso de los servicios de salud, las personas afro e indígenas presentan mayor mortalidad, y menores probabilidades de sobrevivencia ante enfermedades, por la insuficiencia de aseguramiento sanitario y menor acceso a servicios médicos[18].

LGBTQ: en 2018 las 125 denuncias presentadas por esta población fueron por violencias: física (96%), sexual (53%), patrimonial (43%), económica (33%) y psicológica (8%), aunque también es recurrente que vivan violencias relacionadas con la falta de acceso a la educación y la desprotección laboral. En el 2020 las barreras del confinamiento, evidenciadas desde la reducción en la capacidad de acción de recursos humanos del Estado impactaron en la disminución de denuncias; durante el 2021 se reportaron 26 amenazas contra defensores y activistas LGBTQ[19], no obstante, las cifras son poco precisas, lo que también explica que pocas personas LGBTQ aparezcan en el RUV.

Niños y niñas: las brechas presentes en el ICH entre diferentes estratos socioeconómicos tienen relación con las identidades étnicas y el nivel de educación. La población analfabeta en el Chocó es de 24%, en Cauca 11% y en el Valle del Cauca 6%, durante la pandemia hubo un cese educativo[20] que impactó aún más en la situación de inequidad, generando incluso que algunos niños y niñas laboraran desde temprana edad[21], el secretario de educación manifestó que en Buenaventura hubo retiro de hasta el 40% de la comunidad estudiantil por miedo a la violencia, esta problemática se trasladó al gobierno nacional, y a los ministerios de defensa y educación[22]. Preocupan las crecientes problemáticas

18 Carlos Augusto Viáfara-López et al. (2022), Inequidad por la condición étnico-racial en el aseguramiento de salud en Colombia: un estudio de corte transversal, Revista Panamericana de Salud Pública, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7820510/

19 Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y lo Asuntos de Género (2022), Una radiografía del prejuicio: informe de derechos humanos de personas OSIGD-LGTBI 2021, https://repositorio.defensoria.gov.co/bitstream/handle/20.500.13061/371/Informe%20OSIGD%20ver1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

20 Se presentó un cambio en el modelo que afectó al 79% de los estudiantes porque no tenían acceso a internet y computador, además hubo afectaciones por barreras invisibles que impedían la libre circulación.

21 Podcast Voces de Buenaventura, episodio 4 La educación es un privilegio, Agir ensemble pour les droits humains.

22 Fuente: Voces del Pacifico

de salud mental en niños(as), jóvenes y mujeres, el aumento de suicidio infantil, el consumo de sustancias psicoactivas, el bullying y el maltrato escolar, reflejando la violencia de su entorno; en el primer semestre de 2022 se presentaron 127 eventos en el marco del conflicto armado que los ponían en riesgo[23]. En Buenaventura los niños(as), adolescentes y jóvenes son la población con mayor riesgo, representando el 65,2% de las víctimas de confinamiento y el 57% de los homicidios[24]. El OPROB identificó a Buenaventura como un municipio con mayor riesgo por reclutamiento forzado y violencia sexual a menores en el marco del conflicto.

Jóvenes: el contexto bélico les hace más vulnerables al reclutamiento forzado, asesinatos, amenazas y otras violencias que afectan sus derechos fundamentales, además el confinamiento y los hechos victimizantes en comunidades indígenas han repercutido en un aumento de suicidios en jóvenes indígenas, con 138 casos presentados desde el 2015 hasta marzo de 2022[25], quienes además tienen un panorama con pocas oportunidades, visibilizada en pocas opciones de educación superior y altas tasas de desempleo (que son inequitativas entre mujeres y hombres)[26]. De acuerdo con las cifras oficiales del DANE en Buenaventura, durante el periodo 2017-2021, de las 58.395 víctimas registra-

23 ONCA registró 20 eventos del conflicto armado en el Cauca, 12 en el Chocó y 15 en el Valle del Cauca, monitoreados en el marco de la resolución 1612 del CSNU, que afectaron a por lo menos 242.241 niñas, niños y adolescentes de manera directa. ONCA, Observatorio de niñez y conflicto armado de COALICO (2022), Boletín de monitoreo No. 27, https://coalico.org/wp-content/uploads/2022/08/Boletin-ONCA-No.-27.pdf

24 https://www.pares.com.co/post/bolet%C3%ADn-no-1-juventud-y-violencia-el-posconflicto-en-buenaventura

25 El Espectador, Yessika Lozano (2022) "En Bojayá, los jóvenes indígenas se quitan la vida ante el temor a la violencia", https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/suicidios-en-choco-van-mas-de-20-jovenes-indigenas-en-2022-ante-el-temor-a-violencia-y-reclutamiento/?cx_testId=51&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=1#cxrecs_s

26 DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2022), La información del DANE en la toma de decisiones regionales, Cali-Buenaventura-Valle del Cauca.

das por algún tipo de violencia, 23 156 corresponden a jóvenes entre 14 y 28 años (39,7%).

Mujeres: la pandemia afectó la empleabilidad, tanto por el incremento del desempleo, como por los obstáculos estructurales para vincularse a uno; en el Cauca durante el 2020 la brecha de empleabilidad para hombres y mujeres fue del 29%[27]; en el Valle del Cauca la tasa de desempleo para las mujeres en el 2020 fue de 25,8% , aumentando 10 puntos más que el año anterior, en Buenaventura la tasa de desempleo para las mujeres en 2020 llegó a 39,8%, y al terminar el confinamiento muchos hombres recuperaron su empleo, pero las mujeres no regresaron al mercado laboral[28], o acudieron a la informalidad o a trabajos parciales, como ocurrió también en el Chocó, que por cada 10 hombres que volvieron a encontrar empleo después de la pandemia, solo una mujer lo hizo29, pero fueron ellas quienes en mayor proporción enfrentaron las condiciones de trabajo y cuidado derivadas de la pandemia y sus prácticas de manejo30.

Hubo un aumento significativo de las violencias y opresiones que sufren las

---

27 Secretaria De La Mujer: Cauca. (2021). Boletín: Las cifras hablan por ti y por mí. https://secmujer.cauca.gov.co/images/LAS_CIFRAS_HABLAN_POR_TI_Y_POR_MI_pdf_ok_2_compressed_1.pdf

28 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2021), La información del DANE en la toma de decisiones regionales, Cali-Valle del Cauca. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-departamentos-ciudades/210302-InfoDane-Cali-Valle-del-Cauca.pdf

29 DANE, CPEM & ONU Mujeres, Entidad De Las Naciones Unidas Para La Igualdad De Género Y El Empoderamiento De Las Mujeres (2020, septiembre). Mujeres y hombres: Brechas de género en Colombia (No 1).https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf

30 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2021), Informe Especial COVID-19 No 9. La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46633/5/S2000740_es.pdf

"tengo un sin número de personas desaparecidas, niñas de 16 o 17 años que están desaparecidas y que los familiares no colocan la denuncia porque los bandidos los amenazan".

mujeres, debido a la pandemia y a la agudización del conflicto territorial, incrementaron problemáticas de salud mental, las muertes de corazón e infartos. En Buenaventura el año 2019, según datos de SIVIGILA, el índice de intentos de suicidio fue mucho más importante en las mujeres que en los hombres, 71% contra el 29%. Indican también que el 56% de las personas con conducta suicida tienen entre 10 y 20 años, y el 23% están comprendidas entre 21 y 30 años. María Elena Córdoba, coordinadora del programa de Salud Mental de la secretaria de salud indica que en Buenaventura "durante el primer semestre del 2020 se han presentado 26 casos de intento de suicidio"[31].

Si bien disminuyeron las denuncias no fue debido al cese de violencias, pues 43 mujeres fueron asesinadas en el 2021 por violencia de género[32], además entre enero de 2021

y junio de 2022 asesinaron a 48 mujeres transgénero[33]. Medicina Legal registró 10 feminicidios en el Valle del Cauca, 3 en el Cauca y 2 en el Chocó; en este mismo año la Fiscalía recibió 114.727 denuncias por violencia intrafamiliar, con el 77% de mujeres víctimas, y de las 43.394 denuncias por violencia sexual, el 86% de las víctimas fueron mujeres [34]. Según las estadísticas delictivas de la Policía Nacional, entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2022, en Buenaventura se han presentado 119 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, 49 casos de delitos sexuales y 6 casos de feminicidios. Sin embargo, como lo indica el personero de Buenaventura Edwin Patiño muchas denuncias no están registradas, "tengo un sin número de personas desaparecidas, niñas de 16 o 17 años que están desaparecidas y que los familiares no colocan la denuncia porque los bandidos los amenazan".[35]

---

31 https://www.buenaventura.gov.co/articulos/buenaventura-trabaja-unida-para-la-prevencion-del-suicidio

32 Defensoría del Pueblo (2022), Informe anual 2021, https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2022/03/Informe_anual_2021.pdf

33 Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y lo Asuntos de Género (2022), Una radiografía del prejuicio: informe de derechos humanos de personas OSIGD-LGTBI 2021, https://repositorio.defensoria.gov.co/bitstream/handle/20.500.13061/371/Informe%20OSIGD%20ver1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

34 Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2022). Situación de los derechos humanos en Colombia, https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/A_HRC_49_19_AdvanceUneditedVersion_SP.pdf

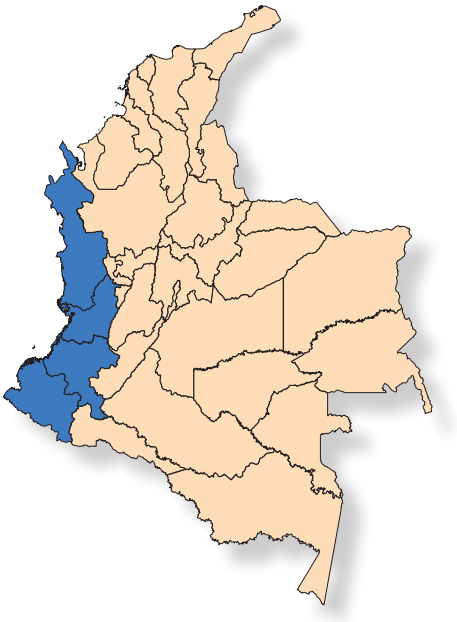
35 https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/05/desplazamiento-desaparicion-y-reclutamiento-de-jovenes-por-bandas-delincuenciales-asi-esta-el-panorama-en-buenaventura/

Recomendaciones:

Es urgente adoptar una visión integral de seguridad para evitar la repetición de hechos victimizantes, y caminar hacia la desmilitarización de los territorios, que se brinde protección a lideresas y defensoras de derechos humanos y se tengan sistemas de registro de información completa, clara y con enfoque de género, étnico, diferencial e interseccional para tener diagnósticos actualizados e implementar o fortalecer rutas y protocolos adecuados, que cuenten con personal idóneo, presupuesto, equipamiento e infraestructura necesaria para la atención efectiva y humanizada. Es importante sumar estrategias que transformen factores generadores de violencia, que se protejan los derechos de las mujeres en todo su ciclo vital y a su orientación, identidad sexual y grupo étnico, que se implementen políticas y programas en defensa de la vida, del territorio, del ambiente, y se promueva el ejercicio de masculinidades equitativas no violentas.

Es vital seguir realizando acciones estratégicas que posibiliten avances en la aplicación de los enfoques transversales en la implementación del Acuerdo, desde los Planes Nacionales de Reforma Rural Integral, de educación, vivienda, agua potable, desarrollo rural productivo, formalización laboral, protección social, derecho a la nutrición, además que se contemple la sustitución de cultivos de uso ilícito en territorios con comunidades étnicas, y se les posibilite a las mujeres su participación significativa en los PDET y los PNIS, que se les garantice paridad en instancias de representación política, que se les reconozca su liderazgo y aportes a la construcción de paz, y se fortalezca su participación política, ciudadana y comunitaria, así como su autonomía económica.

Asimismo, resulta fundamental seguir contando con el apoyo de organismos internacionales tanto en implementación de Acuerdo como en asesorías para garantizar la efectividad en las instancias que tiene Colombia y que se respeten los derechos de las comunidades, que se aplique el derecho internacional humanitario, reconociendo particularmente la grave situación que afrontan los territorios que aquí fueron referidos.



Situación de derechos en Buenaventura-Valle del Cauca, Cauca, Bajo Atrato chocoano 2019-2022

Contexto (región del pacífico): entre 2019-2022 se vivió en Colombia un panorama de implementación de los Acuerdos de Paz, un contexto particular preelectoral, de paro nacional, pandemia mundial por COVID-19, y agudización de violencias por causa del conflicto armado.

Esta región se caracteriza por tener mayor presencia de grupos étnicos y territorios colectivos de todo el país, cuenta con importantes procesos organizativos de la sociedad civil, se destaca por sus riquezas naturales, hídricas y minerales que a la vez lo han hecho más vulnerable al conflicto.

Buenaventura: tiene el mayor puerto del país, pero esto le ha acarreado desigualdades, aumento de la violencia y empobrecimiento de sus habitantes, de los cuales el 82% se encuentra en pobreza extrema. El 80% de su población son afrodescendientes y el 6% son indígenas. Su posición estratégica ha sido clave para la economía ilegal, el narcotráfico, el asentamiento de multinacionales y grupos armados que instauraron un orden social criminal sustentado en la extorción a la ciudadanía; se considera la ciudad más peligrosa del país.

Cauca: departamento con mayor población indígena, tiene el mejor potencial para la generación de energía hidráulica, allí predomina la siembra de coca y la extracción de oro, generando múltiples afectaciones por el conflicto armado. Presenta el mayor registro de asesinatos dirigidos principalmente contra lideres, lideresas, defensores de derechos humanos e indígenas.

Bajo Atrato chocoano: colinda con el océano pacífico y el caribe, con la selva del Darién y el nudo del Paramillo, sin embargo, es un lugar de difícil acceso, por lo cual el río se convierte en la única autopista, esta conexión geográfica ha hecho favorable el desarrollo de economías ilegales y la explotación de recursos naturales de manera indiscriminada, su principal fuente de ingresos es la extracción de oro y madera

Avances en la implementación del acuerdo

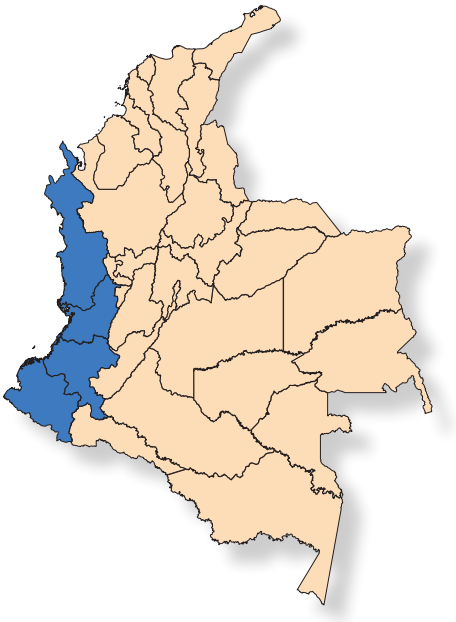
Se resalta el conpes 3931, el trabajo de la Mesa de Género del CNR, la creación del Comité de Género y diversidades, el reconocimiento de las víctimas de violencia de género y sexual ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Muchas de las instancias creadas para víctimas, población civil y firmantes de paz surgen como producto de la organización y movilización social, del litigio estratégico y las denuncias a la comunidad internacional.

Desde la firma del Acuerdo hasta el 2022 se han registrado 541 asesinatos, 65 fueron mujeres y 11 de ellas eran Firmantes de Paz.

Se han registrado 7.500 víctimas de desplazamiento forzado en la región Pacífico, de las cuales 80% son mujeres y niños, y el 50% pertenecen a comunidades étnicas.

Más que avanzar con la implementación de los Acuerdos, se está presentando una agudización del conflicto, obispos católicos de la Región Pacífico y Suroccidente solicitan iniciar diálogos de paz con el ELN y las AGC



Situación de derechos en Buenaventura-Valle del Cauca, Cauca, Bajo Atrato chocoano 2019-2022

Muchas violencias son interseccionales; las mujeres indígenas y afrocolombianas sufren una agudización de violencias no solo en razón de su género, sino también por su etnia y situación socioeconómica.

Indígenas: Poco avance en la implementación de disposiciones del Acuerdo de Paz enfocadas en género y etnicidad. Preocupan los ataques y asesinatos contra defensores de derechos humanos indígenas, principalmente de zonas rurales.

LGBTQ: Esta población presentó denuncias por violencia física, sexual, patrimonial, económica y psicológica, también sufren violencias recurrentes por falta de acceso a la educación, y por desprotección laboral.

Afrocolombianas: Persisten brechas frente al acceso y uso de los servicios de salud, las personas afro e indígenas presentan mayor mortalidad, y menores probabilidades de sobrevivencia ante enfermedades, por la insuficiencia de aseguramiento sanitario.

Niños y niñas: Preocupan las crecientes problemáticas de salud mental en niños(as), jóvenes y mujeres, el aumento de suicidio infantil, el consumo de sustancias psicoactivas, el bullying y el maltrato escolar, reflejando la violencia de su entorno.

Jóvenes: El contexto bélico les hace más vulnerables al reclutamiento forzado, asesinatos, amenazas y otras violencias que afectan sus derechos fundamentales. Presentan pocas oportunidades de educación superior, altas tasas de desempleo, y ha aumentado el aumento de suicidios en jóvenes indígenas.

Mujeres: La pandemia afectó las brechas estructurales en la empleabilidad. Hubo un aumento significativo de las violencias y opresiones que sufren las mujeres, debido a la pandemia y a la agudización del conflicto territorial, incrementaron problemáticas de salud mental, las muertes de corazón e infartos.

Recomendaciones

Adoptar una visión integral de seguridad para evitar la repetición de hechos victimizantes, y caminar hacia la desmilitarización de los territorios.

Brindar protección a lideresas y defensoras de derechos humanos.

Tener sistemas de registro de información completa, clara y con enfoque de género, étnico, diferencial e interseccional para tener diagnósticos actualizados.

Implementar o fortalecer rutas y protocolos adecuados, que cuenten con personal idóneo, presupuesto, equipamiento e infraestructura necesaria para la atención efectiva y humanizada.

Sumar estrategias que transformen factores generadores de violencia, que se protejan los derechos de las mujeres en todo su ciclo vital y a su orientación, identidad sexual y grupo étnico.

Implementar políticas y programas en defensa de la vida, del territorio, del ambiente.

Promover el ejercicio de masculinidades equitativas no violentas.

Avanzar en la aplicación de los enfoques transversales en la implementación del Acuerdo.

Contar con apoyo de organismos internacionales en implementación del Acuerdo y en asesorías para garantizar la efectividad de los derechos.

UNA INICIATIVA CONJUNTA

En Francia:
Des membres du Réseau France Colombie Solidarités (RFCS) :
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura - ACAT; Agir Ensemble pour les Droits Humains - AEDH;
Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo - CCFD - Terre Solidaire; Ecole de la Paix;
France Amérique Latine; Travailler Ensemble Jeunes et Engagés - TEJE; Peace Brigades International PBI - France;
Secours Catholique - Caritas Francia - SCCF.

En Colombia:
Centro de Investigación y Educación Popular – Programa por la Paz - CINEP-PPP;
Corporación de Investigación y Acción Social y Económica - CIASE;
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación - CCDE; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - CIJP;
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos - ILSA; Amigos de la UNESCO;
Colombia Nuestra; Enfances 2/32 Francia Colombia; Secretariado Nacional de Pastoral Social SNPS - Caritas Colombia; Asociación para la Promoción Alternativa - MINGA ; Taller abierto; Vamos Mujer.

Proyecto co-financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Secours Catholique - Caritas Francia (SCCF)

Este documento cuenta con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo.
No obstante, las ideas y opiniones presentadas no representan necesariamente las de la AFD.

Diseño y concepto gráfico: JM Calle